

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Pachuca, Julio 14 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por Fernando Parra, contra el C. Juez 1º de 1ª instancia de ésta Ciudad, por tenerlo en prision mas de tres dias de la ley, sin motivarla con el auto respectivo, como previene el artículo 19 de la Constitucion general, resultando del informe pedido á la autoridad responsable y de la confesion del quejoso, que si bien es cierto que se habian dejado trascurrir los expresados tres dias sin dictar el auto formal de prision, el mismo dia en que se promovió éste juicio y pocas horas despues de espirado aquel termino, se cumplió con éste requisito, por lo que ya en estos momentos no hay violacion de la garantía que se invoca; de conformidad con lo prevenido por los artículos 101 fraccion 1ª y 19 de la Constitucion general, se decreta: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al súbdito español Fernando Parra, contra el C. Juez 1º de 1ª instancia de ésta Ciudad, por la violacion de la garantía consignada en el referido artículo 19, por estar ya obsequiado su precepto.

Hágase saber; exíjase la reposicion del papel sellado; publíquese, y con citacion de las partes remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así sentenció y firmó el Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito de Hidalgo.—Doy fé.—*M. Mejía.*—*Francisco Briseño.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 28 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por Fernando Parra, contra el Juez 1º de 1ª instancia de Pachuca por haberlo detenido en prision mas de tres dias sin motivarla con el auto respectivo, con violacion de garantías que otorga la Constitucion de la República.

Considerando: que á pocas horas de trascurrido el término constitucional se decretó el auto motivado de prision, por lo que en la actualidad no existe violacion alguna de las garantías que otorga la Constitucion federal; con fundamento del artículo 101 de la misma, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 14 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al súbdito español Fernando Parra, contra el C. Juez 1º de 1ª instancia de Pachuca, por violacion de la garantía consignada en el artículo 19 constitucional, por estar obsequiado su precepto.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Jose María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramires.*—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 12 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por Miguel Perez, contra la sentencia de muerte que pronunció en su causa el C. Geefe Político de Orizaba.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el reo Mi

guel Perez, sentenciado á sufrir la pena capital por la Gefatura política del Canton de Orizaba, despues de haber ocurrido sin efecto alguno favorable á la Legislatura en solicitud de la gracia de indulto de dicha pena, pide por medio de su defensor amparo y proteccion á la justicia federal contra la sentencia ejecutoria pronunciada, porque con ella se le violan las garantías consignadas en favor del hombre en el artículo 14 del Código fundamental de la República, y al mismo tiempo ha solicitado la suspension del acto reclamado que le fué concedida inmediatamente, y comunicada por telégrafo al C. Gefe político, la aceptó como debia, contestando de conformidad.

Pedido el informe correspondiente á dicha autoridad, lo ha emitido manifestando: que es cierto que ha juzgado al quejoso por los delitos de robo con asalto cometidos en la casa de D. Casto Fernandez de Orizaba, imponiéndole la pena de muerte que no le fué indultada y ha sido mandada ejecutar, acompañando copia del acuerdo respectivo de la H. Legislatura y la causa que se le siguió al quejoso y á sus compañeros que obtuvieron dicha gracia.

Este ministerio fiscal ha examinado con detenimiento el caso, y advierte por las constancias de la propia causa, que ninguno de los delitos porque ha sido juzgado Miguel Perez es de asalto en camino ni otro alguno de los que el artículo 23 de la Constitucion federal permite que puedan castigarse con pena de muerte: que en consecuencia y no pudiéndose suspender esa garantía y las demas que aseguran la vida del hombre, con arreglo al artículo 29 de dicho Código, es indudable que han sido violadas en su persona con el hecho de habersele impuesto la pena capital conforme á las leyes de 23 de Mayo del año corriente, siendo así que esas disposiciones hacen extensivas la pena capital á otros casos no comprendidos en el citado artículo 23, por cuya razon es de observarse lo prevenido en el 26 de la propia Constitucion.

Este concepto está corroborado por una de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de 24 de Julio de 1871, pronunciada en un juicio de amparo promovido por otros reos de robo con asalto en la casa de Pedro Carrizales, que se hallaba situada en el campo, á un cuarto de legua distante de un pueblo, y fué publicado en el "Semanario Judicial de la Federacion" 2ª parte, tomo 2º página 142.

Por estos fundamentos, el suscrito Promotor pide al Juzgado se sirva amparar y proteger al reo Miguel Perez, contra la sentencia de muerte que pronunció en su causa el C. Gefe político de Orizaba, á fin de que pronuncie de nuevo la que corresponde en derecho; quedando en consecuencia sin efecto la negativa de indulto acordada por la H. Legislatura respecto del mismo promoviente.

Heróica Veracruz, 5 de Setiembre de 1873.—*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

H. Veracruz, Setiembre 19 de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por el reo Miguel Perez, sentenciado á sufrir la pena capital por la Gefatura política de Orizaba, y á quien se denegó el indulto que solicitó de la H. Legislatura, contra la sentencia ejecutoria que le viola las garantías consignadas en los artículos 14 y relativos del Código fundamental de la República, solicitando á la vez la suspension del acto reclamado; visto el proveido en que se mandó suspender dicho acto hasta la resolucion de este juicio; el informe emitido por la autoridad política en que manifiesta que ha juzgado y sentenciado al quejoso á la pena capital por los delitos de robo con asalto cometidos en casas particulares, justificando su informe con las constancias conducentes de la causa y acuerdo de la H. Legislatura que acompañó, visto así mismo el pedimento fiscal y todo lo demas

que consta de autos. Considerando: que ninguno de los delitos porque ha sido juzgado el promovente, es el de asalto en camino ni otro alguno de los que el artículo 23 de la Constitucion federal permiten que puedan castigarse con pena de muerte: que no pudiéndose suspender ninguna de las garantías que aseguran la vida del hombre, conforme al artículo 29 de dicha Constitucion, resultan violadas estas en la persona que ha promovido este juicio, con el hecho de habersele impuesto la pena capital en observancia de las leyes de 23 de Mayo de 1872, 18 de Mayo de 1871 y 3 de Mayo de este año, siendo así que esas disposiciones hacen extensiva la referida pena á otros casos no comprendidos en el citado artículo 23: Considerando, por último, que en otros casos semejantes al presente se han pronunciado ejecutorias por la Suprema Corte de Justicia, entre las cuales se encuentra la de fecha 24 de Julio de 1871, en un juicio de amparo de tres reos de robo con asalto en una casa particular que se hallaba situada en el campo á un cuarto de legua distante de la poblacion y se registra en el "Semanario Judicial," 2ª parte, 2º tomo, página 142, habiendo sido amparados por la justicia federal; por cuyos fundamentos este Juzgado, con vista de lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la Constitucion de la República y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, falla; Primero: La justicia de la Union ampara y protege al reo Miguel Perez contra la sentencia de muerte que pronunció en su causa el C. Gefe político de Orizaba, á fin de que se dicte de nuevo la que corresponda en derecho; quedando sin efecto el acuerdo de la H. Legislatura que les denegó el indulto. Segundo: Notifíquese este fallo; líbrense las copias que previene la ley, para su publicacion en el "Progreso" y "Semanario Judicial," elevándose estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado: damos fé.—Lic. Luis I.

Gomez.—De asistencia.—José M. Gonzalez.—Vicente Simancas.

Son copias de sus originales á que me remito. Lo certifico. Heroica Veracruz, Setiembre 26 de 1873.—Lic. Luis I. Gomez.—José M. Gonzalez.—Vicente Simancas.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Miguel Perez, contra el Gefe político de Orizaba que lo condenó á la pena de muerte como culpable de haber concurrido al asalto y robo de una tienda de comercio en la misma Villa, aplicándole la ley de 3 de Mayo del presente año contra salteadores y plagiarios, con violacion de las garantías consignadas en los artículos 13, 14, 21 y 23 de la Constitucion federal.

Considerando: que no está plenamente probado que Miguel Perez tomara parte en el robo de la tienda de comercio de D. Cástulo Hernandez en Orizaba, ni que tal delito fuera cometido en gavilla, circunstancias necesarias para poder aplicar la ley de 3 de Mayo á los actos de asalto verificados en poblado.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 19 de Setiembre del presente año, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al reo Miguel Perez, contra la sentencia de muerte que pronunció en su contra el Gefe político de Orizaba, á fin de que se dicte de nuevo la que corresponda en derecho, quedando sin efecto el acuerdo de la H. Legislatura que le denegó el indulto.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta senten-

cia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 23 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

## COMPETENCIA.

*Iniciada por el C. Juez de 1ª instancia de Apam, al 5º de lo civil de México, para conocer del juicio ejecutivo que D. José M. Saldivar ha promovido al C. Egreen Moreno.*

### PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que D. José M. Saldivar ha demandado ejecutivamente á Egreen Moreno, el pago de la cantidad de trescientos un peso tres y cuarto centavos, procedentes de unas escrituras que el actor acompañó á su demanda. Ya el juicio estaba adelantado, ya se había trabado ejecución y el ejecutado había opuesto las excepciones de plus-petición, ser la cantidad ilíquida y otras, y aun se había celebrado ya la junta que en semejantes casos prescribe el Código de procedimientos, cuando el Juzgado que actuaba recibió un oficio inhibitorio del Juez de 1ª instancia de Apam, reclamando el conocimiento del juicio en cuestión. Se pasaron entonces entre ambos jueces las contestaciones de estilo, y no habiéndose entre sí conformado con las razones que unitivamen-

te se dieron, han ocurrido á esta Suprema Corte solicitando la debida resolución.

El Fiscal á su vez, al estudiar los fundamentos en los que cada una de las autoridades contendientes apoya su respectiva pretension, reconoce como mas sólidos y mas arreglados á derecho, los expuestos por el Juez de Apam. Para convencerse de ese aserto se hace preciso detenerse algun tanto en la cuestión, y examinar las razones de uno y otro Juez. El de México alega, que D. Egreen Moreno en la escritura, origen de la acción deducida contra este por Saldivar, Moreno renunció su fuero y domicilio para el caso de demanda, ademas que en México se celebró el contrato, y en el juicio D. Egreen Moreno ha contestado la demanda sin reserva de la jurisdicción competente y sin declinar la del Juez que lo emplazó y conocía de dicho juicio.

No hay duda que esas razones á primera vista aparecen concluyentes. Renuncia del domicilio fuera del contrato y sumisión al Juez ante quien se contesta, que cuando menos puede importar una próroga de jurisdicción, son motivos mas que suficientes para determinar á su favor el presente recurso. Pero en justicia hay que hacer las observaciones siguientes, y las que esplaya en su respectivo informe el Juez de Apam. En primer lugar, la renuncia del fuero de domicilio.

Respecto de este punto es de notarse que el Juez de México ha puesto en olvido las últimas frases contenidas en la escritura otorgada en México á 30 de Enero de 1872, y de la que se deduce inmediatamente la acción del demandante. Esas frases demuestran con coincidencia que al principio de celebrar el contrato, la intención de los contrayentes fué que se hiciera renuncia por la parte de Moreno de su domicilio en Apam, y se sujetara para el caso de demanda á los jueces de México; en el mismo instante de formar la escritura hicieron esta ratificación de suma importancia para la resolución del caso que nos ocupa.